

## hacia un nuevo compromiso histórico

En los últimos meses El Salvador ha acelerado vertiginosamente su caída en la violencia, la incertidumbre y miedo cotidianos, y el pesimismo frente al futuro inmediato.

Esta dramática coyuntura tiene profundas raíces estructurales y obliga a toda la ciudadanía consciente y especialmente a aquellos núcleos expresa o tácitamente responsables de la conducción política del país a un análisis serio y objetivo.

A comienzos de la década de los 60, ante la percepción del eventual agotamiento del modelo socio-económico agro-exportador y el impacto político que en toda América Latina produjo la revolución cubana, con el apoyo de Washington y aprovechando los favorables precios internacionales del café, se inició en El Salvador una etapa de apertura. Apertura económica, traducida en la ampliación horizontal del mercado intrarregional y el incipiente proceso de industrialización propiciados por el Tratado General de Integración Económica Centroamericana, y apertura política, concretada en la democracia representativa proporcional. No obstante el naufragio de los moderados planes de reformas económico-sociales patrocinados por la Alianza para el Progreso y otros similares, y el irregular funcionamiento de una democracia liberal burguesa, cuyas condiciones de posibilidad eran endeble y precarias, se logró, en el plano económico, cierta diversificación de las inversiones y consiguiente incremento de la industria y los servicios, y, en la arena política, el crecimiento de los partidos, mayor participación electoral y el incremento de la organización popular, sobre todo de carácter gremial. Cierta optimismo y nuevas expectativas cundieron en el país.

Sin embargo, la opinión pública de las mayorías, las presiones populares, las recomendaciones económicas y las reiteradas promesas políticas en pro de reformas estructurales, quedaron reducidas a papel mojado y letra muerta a la hora de la verdad, y ni el trauma del conflicto bélico con Honduras, ni la desintegración centroamericana, ni la nueva actitud de la Iglesia Católica, ni el aparente incremento de la autonomía relativa del Estado, basada en cierta modernización de la burocracia militar y civil, consiguieron hacerlas realidad.

Ahora bien, sin cambio estructural se hace imposible el cambio continuado de la dinámica social. Las estructuras se vuelven anacrónicas. Con ellas los momentos favorables son fugaces y en cada vuelta a la "normalidad" reaparece la normal anomalía y la conflictividad social, agudizadas ahora por la frustración de las expectativas.

El tiempo histórico es juez implacable de las oportunidades perdidas: cambios que se debieron haber hecho y no se hicieron. Tal vez por ello El Salvador esté a punto de concluir una etapa histórica y la pasada resistencia al cambio razonable por medios civilizados sea la principal responsable de la dificultad de conservar siquiera lo mejor del pasado, como fue la apertura y posibilidad de procesos políticos democráticos y de cambios socioeconómicos graduales.

¿Cómo afronta el país su futuro inmediato en el momento actual? Con conciencia de la injusticia y de la violencia vigentes, con incertidumbre, miedo y pesimismo.

La situación en que siguen viviendo millares de campesinos sin tierra, desocupados o mal pagados, la condición de los obreros y otras capas urbanas obligadas a vender su fuerza de trabajo por unos escasos colones, la precaria subsistencia de una clase media relativamente ampliada pero subordinada y silenciada, la prepotencia de unos pocos insaciables en sus muchos privilegios, las dificultades crecientes del juego de los partidos políticos legales, la instrumentalización de organismos del Estado en funciones ajenas a su naturaleza, la conflictividad de las relaciones Iglesia-Estado y el deterioro de la imagen del país en el exterior, son indicadores duros, pero reales, de la crisis que estamos viviendo. Crisis de valores fundamentales y de factores vitales de la convivencia como son la vigencia de los derechos humanos, la primacía del derecho, el respeto social, la legitimidad del sistema político y el auténtico desarrollo económico. Los hechos acaecidos de julio de 1976 a abril de 1977, de la gran mayoría básicamente conocidos, son prueba de ello.



Pero más grave aún. En estos últimos meses se ha ido gestando la polarización de los sectores en pugna, el estrechamiento de los caminos civilizados de solución a los conflictos estructurales y el incremento de la intolerancia y la violencia. Aterra pensar que el país se aboque a pseudo-soluciones violentas, a baños de sangre, a guerras civiles tácitas o expresas, pues una vez en ese callejón sin salida, la ruina económica, el trauma socio-cultural y el crimen político se vuelven cotidianos y crónicos, y desembocan en la destrucción de un país. Tal tragedia, sin embargo no está fuera de la probabilidad del proceso histórico de El Salvador. ¿Hasta qué punto se va haciendo intolerable la brecha entre las expectativas y las insatisfacciones de las mayorías? ¿Qué hacer en tal caso?

Frente a la injusticia estructural y a la dramática coyuntura presente, la mayoría de los salvadoreños hemos dado recientemente muestras indudables de desear soluciones racionales y eficaces por vías civilizadas y pacíficas. De momento la favorable posición del café en el mercado internacional ha logrado paliar en parte el dramatismo de nuestra situación actual, pero todos sabemos que esa bonanza es transitoria y a todos preocupa la falta de diálogo y de flexibilidad en el terreno político y la pérdida del sentido de tolerancia, ponderación y respeto en el conflicto entre los grupos sociales. ¿A dónde iremos a parar si las cosas continúan así? ¿Qué futuro le espera al país de prolongarse por más tiempo las estructuras de injusticia y las prácticas de violencia? ¿Cuál es el porvenir de las nuevas generaciones si no cambiamos y creamos las condiciones de posibilidad de una verdadera democracia económica, social, cultural y política?.

Ha llegado la hora de la reflexión activa y de la acción reflexiva, la hora en que comience a cesar la intolerancia y la violencia, la injusticia y el privilegio.

En los próximos meses la sociedad salvadoreña contará con un nuevo gobierno nacional. Gobierno, que tiene el deber ineludible de gobernar sin abdicar tal responsabilidad en ningún grupo de intereses, y gobierno de la nación, que está compuesta por todos los salvadoreños. Es indudable que el nuevo gobierno recoge la pesada herencia de una nación problema (subdesarrollo socio-económico, situación deprimente de las mayorías, escasez de recursos naturales y humanos, crisis institucional, etc.) y de una nación traumada (acontecimientos socio-políticos de los últimos meses, hipertensión social, violencia, incertidumbre y pesimismo).

Si la legitimidad es eminentemente intersubjetiva perteneciendo a la percepción y cultura colectiva de un pueblo, si el liderazgo supone una especial capacidad comunicativa y empatía bidireccional líder-masa, si la hegemonía genera y goza de cierto consenso y ampliadas alianzas y apoyos, el nuevo gobierno no debe engañarse cerrando los ojos a la crisis de legitimidad, liderazgo y hegemonía que padece la nación. La actualidad, sin embargo, encierra potencialidades de ser transformada en nueva y mejor realidad y la legitimidad, liderazgo y hegemonía son incrementables. ¿Cómo hacerlo?.

Las alternativas polares del tipo "revolución" o "represión" adolecen de falta de análisis político y de simplismo, por lo que no constituyen alternativas reales ni aceptables. La primera parece ignorar la correlación interna e internacional de fuerzas y la reciente experiencia latinoamericana. La segunda tiene costos políticos insostenibles y es socialmente ruinoso a la larga.





Parece perfilarse en cambio cierta tendencia hacia una división funcional entre el aparato estatal, al que le quedaría reservado el orden público, la infraestructura física y la política social, y la empresa privada, encargada de la orientación, iniciativa y crecimiento económico. Tal división funcional, sin embargo, carga al Estado con las empresas económicamente deficitarias, las tareas impopulares del ejercicio de la fuerza coercitiva y los laberintos administrativos de la política social, hipotecándolo en definitiva a una empresa privada cuyas posibilidades financieras, competitividad productiva, capacidad de generar puestos de trabajo, calidad de las relaciones laborales, conciencia del interés nacional y visión de futuro se sobrevaloran y mitifican. Tales esquemas siguen adoleciendo de simplismo y una opción de este tipo en El Salvador tendría probablemente altos costos político-sociales y escasos beneficios económicos-sociales.

Sin suscitar expectativas desproporcionadas e irrealizables en un país pequeño y pobre como el nuestro, es preciso aprovechar al máximo todas nuestras posibilidades reales y mejores capacidades en la urgente e ingente tarea de lograr el desarrollo económico, la participación social y la democracia política. Ante el subdesarrollo, las estructuras de injusticia y las prácticas de violencia, parece haber llegado la hora de un compromiso histórico de las fuerzas sociales racionales y civilizadas del país: de lo más digno y honroso de la Fuerza Armada, de la mejor conciencia y creatividad científica de la Universidad, de lo más productivo y moderno de la empresa privada, de lo más justo y democrático de las organizaciones populares, de lo más técnico y honesto de la Administración Pública, del mejor mensaje de liberación y humanización de la Iglesia, de lo más constructivo y responsable de los partidos políticos.

La iniciativa y la responsabilidad principal de tal compromiso histórico recaerá en el nuevo gobierno. La tarea es ardua y difícil requiriéndose tanto claridad ideológica y voluntad política, como flexibilidad y habilidad. Los riesgos tampoco se deben minimizar, siendo tal vez el más grave el de una inteligencia totalitaria y operativización autoritaria de un compromiso, que ya no sería tal. Solo un correcto y ponderado compromiso histórico de las mejores fuerzas sociales podrá afrontar el presente y el futuro de El Salvador, país que no puede ser rico, pero, en la modestia y austeridad, sí justo, libre y digno, si se logran poner las condiciones de posibilidad para ello.

El Salvador exige un compromiso histórico de las mejores fuerzas sociales racionales y civilizadas comprometidas en el desarrollo económico, la participación y la democracia política.